Las elecciones de 1995

Luis A. Remes y Mabel Scaltritti



INDICE

Algunas perplejidades introductorias	. 3
Un recorrido por las plataformas electorales	5
Las nuevas estrellas electorales: las encuestas	11
La T.V. en campaña	13
Una probable reelección con apoyos heterogéneos	15
El soberano se expide	17
¿Resultados paradójicos?	21
Buscando causas: ¿por qué el triunfo del menemismo?	.22
De la revolución productiva y el salariazo al endiosamiento del merca	dc
Un consenso de pocos para muchos	
Una diosa con pies de barro: la tan ansiada estabilidad	
Modelo económico y régimen político	
A modo de cierre: sobre responsabilidades y resistencias4	0
Bibliografía43	}
Anexo4	14
I) Las privatizaciones	
II) Sobre la corrunción: "clentocracia" o condición estructural de un modelo	

LAS ELECCIONES DE 1995

Algunas perplejidades introductorias

En mayo de 1995 se celebraron en Argentina las terceras elecciones presidenciales desde que en 1983 se restableciera la democracia. El presidente saliente, Carlos Saúl Menem, candidato del Partido Justicialista (P.J.) en coalición con la Unión del Centro Democrático (U.Ce.Dé), se impuso por casi el 50% de los votos. Su programa consistía en la continuidad de un modelo neoliberal que, aplicado por José Alfredo Martínez de Hoz bajo la última dictadura, fue profundizado por el mismo Menem durante los años de su primera presidencia (1989-1995).

Para muchos analistas y observadores, la profundización del modelo neoliberal bajo el menemismo tiene algo de sorprendente y hasta de paradójico. Es el caso de la politóloga Liliana De Riz, quien hacia 1998 observaba: Con el ascenso del peronismo al gobierno en 1989, las bases del modelo económico de posguerra fueron trastocadas. La envergadura de las transformaciones emprendidas por el peronismo tiene una magnitud comparable a la que el mismo partido llevó a cabo en los '40, sólo que el sentido de los cambios está en las antípodas del modelo estatista, proteccionista y asistencialista surgido en 1946.

Unos años después, en 2001, Eduardo Basualdo escribía: No es llamativo que los sectores dominantes hayan gestado inicialmente estas modificaciones estructurales tan regresivas en el marco de una brutal dictadura que las impuso a sangre y fuego. Lo que resulta sorprendente, es que tales transformaciones se hayan consolidado en democracia, cuando las mismas exigían acentuar, hasta un grado desconocido hasta entonces, la concentración del ingreso y la exclusión social.

Es decir que, siguiendo las observaciones de estos dos especialistas, en los años '90 asistimos al menos a una doble paradoja, consistente en que no sólo un modelo excluyente fue profundizado durante un régimen democrático -en el que

podía presuponerse una oposición popular importante-, sino que tuvo como principal promotor al partido que, históricamente, se había opuesto a este tipo de políticas.

¿Cómo fue posible que un modelo que no había logrado adhesión popular desde el derrocamiento del peronismo en 1955, hasta al menos fines de los años '80, sí la tuviera en 1995? ¿Cómo lograron los representantes del capital más concentrado un apoyo social extendido para sus proyectos políticos y económicos? ¿Cómo llegaron a impulsar sus políticas sin apelar, como era costumbre, a fraudes o golpes militares?

A responder estos interrogantes e indagar en cuestiones que, a primera vista, parecen paradójicas, dedicaremos las próximas páginas. Antes haremos un recorrido por las plataformas electorales, las encuestas, las campañas televisivas, los apoyos sociales y políticos a los principales candidatos, el clima previo a las elecciones y los resultados electorales.

Un recorrido por las plataformas electorales

En el otoño de 1995 la ciudadanía fue convocada para determinar quién sucedería al Presidente Carlos Saúl Menem para el período 1995-1999. También para renovar parcialmente la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación, así como las gobernaciones de algunas provincias.

Aunque no faltarán menciones a las elecciones de diputados, senadores y gobernadores, nos centraremos fundamentalmente en las elecciones presidenciales. Para las mismas, se presentaban una cantidad importante de partidos. Los que, desde hacía algún tiempo se presentaban con más chances para imponerse, eran el P.J., el Frente País Solidario o FREPASO (una coalición de reciente creación conformada por el Frente Grande y País), y la Unión Cívica Radical (U.C.R.).

Carlos Menem se presentaba para la reelección, habilitado por reformas incorporadas a la Constitución Argentina en 1994. Lo acompañaba en la fórmula, su ministro del Interior, el bonaerense Carlos Ruckauf. Por su parte, el FREPASO, llevaba a la cabeza de la fórmula al líder de País y exgobernador de la provincia de Mendoza, José Octavio Bordón, y para la vicepresidencia a Carlos *Chacho* Álvarez, del Frente Grande. La fórmula de los radicales era Horacio Massaccesi-Antonio María Hernández.

En la elección se empleaba el sistema de ballotage, previsto también en la mencionada reforma constitucional. Para evitarlo, el partido que saliera primero en las elecciones debía obtener el 45% de los votos o una diferencia de al menos 10 puntos sobre los restantes.

¿Cuáles eran las plataformas y proyectos de los partidos que competían electoralmente? ¿Qué proponían? ¿Cuáles eran los problemas que más preocupaban en la época y cómo se pensaba solucionarlos?

Uno de los temas más alarmantes era el del **desempleo**, que se volvió un eje de campaña de todos los candidatos, ya que las cifras rondaban –según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)- el 17%.

Al respecto, el P.J. prometía que iba a generar 330.000 nuevos puestos de trabajo anuales, merced a un programa de inversión en obras públicas, como caminos, hospitales y escuelas, contempladas en un plan quinquenal. La desocupación iba a ser atacada además por la profundización de la reforma laboral y la disminución de impuestos al trabajo.

Sus promesas parecían inconsistentes. ¿De qué manera podría el partido bajo el cual el desempleo había aumentado sensiblemente revertir la situación? ¿Por qué prometer políticas de inversión pública y planificación, si dichas palabras constituían una verdadera herejía en un contexto donde todo lo procedente del Estado era considerado un sinónimo de ineficacia e improductividad? ¿Qué significaba una profunda reforma laboral? ¿Acaso incrementar los derechos del trabajador o hacerlos más flexibles? En definitiva, parece descabellado pensar que los votos que se proponía capturar el P.J. pudieran proceder de sus propuestas laborales.

Entretanto, los líderes frepasistas sostenían que se podía disminuir el desempleo con la eliminación de los gastos reservados de la presidencia e incremento de la productividad del gasto público para volcar los recursos hacia las pequeñas y medianas empresas (las Pymes), los programas de empleo, la formación profesional y la construcción de cadenas productivas integrales. También proponían la ampliación de la base de cobertura de seguro de desempleo, así como la instauración de una cultura exportadora. Por su parte, la U.C.R. promovía la reducción gradual de la semana laboral a 44 horas, sin merma salarial, para posibilitar el ingreso de desempleados a los puestos de trabajo que se crearían con las horas vacantes. Alentaba también la puesta en marcha de proyectos de inversión productiva que contemplaran la incorporación de mano de obra, así como la revisión de las leyes de flexibilización laboral recientemente sancionadas. Por su parte, el MODIN (Movimiento por la Dignidad y la Independencia) del líder carapintada Aldo Rico, sostenía que no era posible dar soluciones parciales. Lo que se necesitaba era cambiar el modelo de transferencia de recursos al exterior, reemplazándolo por un modelo de acumulación interna que contemplara una reprogramación del pago de la deuda externa.

La educación fue otro de los temas trascendentes de campaña. Recordemos que, por aquellos tiempos, tenía lugar el debate sobre la Ley Federal de Educación. El P.J. sostenía que terminaría de instrumentar tal ley y que insistiría con su proyecto para la Universidad. Subrayaba que el plan quinquenal contemplaba inversiones para la creación de nuevas escuelas. Mientras tanto, el FREPASO proponía un sensible incremento en el presupuesto educativo y en el de ciencia y técnica. Desde el MODIN –casi en la misma dirección- prometían otorgar el más alto porcentaje del presupuesto al área educativa.

La propuesta más innovadora en el ámbito educativo provenía de la U.C.R. Consistía en la creación de un fondo destinado a la educación en todo el país para evitar la exclusión y asegurar igual calidad de servicio para todos. Promovía además, un plan de alfabetización y el aumento del número de comedores escolares. En línea con su historia, en el campo de la educación superior, prometía afianzar principios de la reforma universitaria, como la autonomía, la autarquía, el cogobierno, la libertad de cátedra y los concursos de oposición y antecedentes. Asegurar el ingreso a la universidad y la gratuidad de la enseñanza seguían siendo temas nodales en las propuestas de los radicales.

Debemos mencionar que la educación fue uno de los campos que sufrió más duramente los embates del menemismo, con una amplia reducción de la calidad educativa. Consecuentemente, el sector fue uno de los que más resistió a las políticas liberales y gracias a su accionar, entre otras cuestiones, la enseñanza universitaria continuó siendo pública en un país donde todas las tendencias iban en sentido contrario. No ocurrió lo mismo con los investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones científicas y técnicas (CONICET), sector donde el liberalismo hizo estragos, reduciendo la cantidad de becas y su monto, y hasta descalificando públicamente, en forma grosera y destemplada, los reclamos de los hombres y mujeres dedicados a la ciencia.

Otro de los temas controversiales y muy complicados, era el de **los jubilados**, quizás uno de los sectores más afectados de la época. Al respecto, el P.J. sostenía la continuidad de una política que había permitido pagarles una deuda heredada de 13.000 millones de pesos y prometía buscar una fórmula que

permitiera aumentar los haberes mínimos en los casos más apremiantes, sin recurrir a la emisión monetaria.

El FREPASO se comprometía a impulsar la derogación de la ley de solidaridad previsional por considerarla inconstitucional, ya que fijaba topes a los haberes jubilatorios y suspendía juicios contra el Estado por reajustes en los pagos. A la vez, prometía mantener el nuevo régimen de jubilación privada, aunque auguraba mayores controles para las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y pensiones (A.F.J.P.).

La U.C.R. proponía la renegociación de la deuda externa para poder aumentar los haberes jubilatorios y, en la misma línea, el MODIN planteaba que, a partir del cambio de modelo y de la reprogramación del pago de la deuda externa por ellos planteados, se podría mejorar la situación de los pasivos.

Pero, sin duda, el tema que más preocupaba a los argentinos era el de **la estabilidad económica**. Relacionado con ella, los candidatos tenían sus propuestas sobre la convertibilidad y el tipo de cambio. El P.J. sostenía que se mantendría el esquema vigente de paridad cambiaria y que no habría devaluación del peso.

Resultaba lógico pensar que los que habían logrado estabilizar los precios a partir del régimen de convertibilidad se propusieran mantenerla, pero ¿cuáles eran las propuestas de los partidos opositores al oficialismo?

El FREPASO planteaba continuar la línea trazada por el gobierno de Menem, manteniendo el esquema y no devaluando el peso, mientras que, desde el radicalismo como desde el MODIN, se entendía que había que salir de la convertibilidad, pero sin aclarar demasiado cómo hacerlo. La U.C.R. proponía transitar caminos para salir gradualmente de la convertibilidad con mecanismos complementarios, que no incluyeran la devaluación. Desde el MODIN, aún con menos esfuerzo por explicar el cómo, se afirmaba que se buscaría salir del esquema de convertibilidad y de establecer un tipo de cambio libre.

Una semana antes de las elecciones, el diario *La Nación* les dio la posibilidad a los candidatos presidenciales de escribir una nota donde se explayaran sobre los

problemas argentinos que más les preocupaban, así como acerca de las soluciones que proponían.

El presidente Carlos Menem prefirió hacer proselitismo sobre su gestión de gobierno, remarcando que tomó un país convulsionado y decadente, donde el Estado nacional había perdido su razón de ser, para convertirla en una nación con presente, y sobre todo con futuro. Fuimos capaces –decía Menem- de cambiar la cultura especulativa y rentística por un sistema donde los principales incentivos al progreso son la inversión y la creatividad. Reformamos el aparato estatal ineficiente y corrupto, que era incapaz de proveer los servicios elementales y concentramos sus recursos en el gasto social.

Otro de sus logros, a su entender claro está, fue el de la reforma educativa, *cuyos principales beneficiarios serán nuestros hijos.* Finalmente, aclaró que todo esto se había alcanzado en medio del más pleno derecho de funcionamiento de la libertad y la democracia. Respetamos escrupulosamente —dijo- el derecho de expresión, aún cuando fuimos víctimas de agravios de todo tipo. Difícilmente hayan acordado con este tipo de declamaciones, la periodista Liliana López Foresi, despedida de Canal 13 y víctima de constantes amenazas por sus posturas críticas hacia Menem, o los familiares y colegas de Miguel Bru, estudiante de periodismo y primer desaparecido de la democracia restaurada. Tampoco Fernando Pino Solanas que recibió varios balazos en sus piernas, como advertencia por sus denuncias de la corrupción menemista.

Con respecto a lo que decía ser su principal preocupación, *vencer la desocupación*, Menem anunció la puesta en marcha de un plan quinquenal, donde masivos programas de capacitación harían posible que los trabajadores pudieran acercarse a las demandas de un mercado altamente competitivo.

Por su parte, José Octavio Bordón en su nota *Cómo voy a gobernar del 95 al 99* no realizaba grandes propuestas en torno a este acuciante tema. Sus planteos contra el presidente Menem eran sobre todo cuestionamientos de orden moral. Hablaba, por ejemplo, de *un gobierno decente y mejor* o de que *ha llegado la hora de un consenso*, de *la esperanza contra el miedo*, de *la austeridad contra la frivolidad* o de *la eficacia contra la improvisación y la corrupción*. Las críticas

apuntaban sobre todo a cuestiones de forma y no ahondaban en las causas profundas de los graves problemas que padecía la sociedad argentina.

Al igual que el candidato por el radicalismo, Bordón promovía una restructuración del sistema tributario, porque los ingresos del Estado provenían sobre todo de los impuestos al consumo, con una muy baja participación de los gravámenes a las riquezas y a los ingresos. Para salir de este esquema regresivo, proponía una reducción programada de impuestos al trabajo y al consumo popular.

En su nota, Horacio Massaccesi insistía en la salida de la convertibilidad, sin llegar a una devaluación. Habría que hacerlo muy gradualmente porque –afirmaba- salir de ese esquema hoy sería imposible porque no hay confianza en el peso y la gente saldría corriendo a comprar dólares. Otras propuestas de Massaccesi consistían en la creación de fuentes de trabajo, que permitieran revertir el cuadro de pobreza y desocupación que dejaba el modelo menemista. Auguraba que, si no se producía un cambio de rumbo, un nuevo Chiapas aparecería como amenaza real en el horizonte político-social de la Argentina.

Para evitar que aquí se produjeran los levantamientos populares que conmovían a México, Massaccesi planteaba la reconstrucción del aparato productivo con un modelo exportador pues todas las economías exitosas del mundo se construían en torno a un modelo de industrialización decididamente volcado hacia los mercados externos. Consideraba que la tendencia mundial hacia el libre comercio era positiva e irreversible.

Resulta interesante remarcar el rol que, según Massaccesi debía cumplir el Estado: Mi propuesta de gobierno no contempla un estado desertor de sus obligaciones como orientador de las grandes líneas económicas y proveedor de servicios de salud, educación y seguridad social. Pero tampoco contempla un estado autoritario.

Finalizaba asumiendo que era el único candidato que podía poner en práctica la única alternativa real al modelo de ajuste aplicado por Menem y Cavallo, quienes lo único que ofrecían para los próximos cuatro años eran la estabilidad del desempleo, las economías regionales quebradas, los déficits en aumento y promesas como el flamante plan quinquenal que podría ser ubicado en el terreno

de la política-ficción junto con el salariazo y la revolución productiva. Por todas estas cosas era que Massaccesi se presentaba como la verdadera oposición y la expresión más nítida del *antimodelo*.

Con respecto a los partidos de izquierda, como Alianza Sur, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (M.S.T.), el Partido Obrero (P.O) y el Humanista (P.H.), sus propuestas diferían notablemente de las hasta aquí analizadas. A grandes rasgos, todos se pronunciaban por el no pago de la deuda externa, por terminar con la convertibilidad y romper con el Fondo Monetario Internacional. Además, hacían hincapié en la necesidad de legalizar el aborto y alentar la educación y el trabajo, con propuestas como las siguientes: derogar la ley federal de educación (P.O.); revertir las leyes de flexibilización laboral (Alianza Sur); prohibir despidos y suspensiones (M.S.T.); control de los bancos por los trabajadores (P.O.).

Una propuesta novedosa que presentaban los cuatro partidos era la de una alianza con los países de América Latina. Promovían la unidad política latinoamericana, para frenar los planes de ajuste fondomonetaristas.

Por último, en caso de ballotage, tanto para Luis Zamora, líder del M.S.T., como para Jorge Altamira del P.O., Menem y Bordón representaban lo mismo, por lo cual llamaban a votar en blanco. Mientras tanto, *Pino* Solanas, decía que Alianza Sur analizaría la decisión a tomar según como se presentara el escenario político a partir del 15 de mayo. *Por mi parte* –afirmaba- *a Menem no lo voy a votar*.

Las nuevas estrellas electorales: las encuestas

Desde fines de abril y hasta las elecciones del 14 de mayo, se instaló un clima de ansiedad, creado por la novedad del ballotage. La misma convirtió a los sondeos de intención de voto en el centro del debate político. La discusión por las cifras reemplazó al debate sobre las propuestas. Los encuestadores ocuparon el espacio de los analistas políticos, y la televisión, así como los diarios, focalizaron su atención en los cambiantes datos de los sondeos.

Veamos sólo algunos ejemplos de esas estrellas –las encuestas- que fulguraban en el cielo electoral. En nota de tapa, *La Nación* del 7 de mayo informaba que entre el 21 de Abril y el 6 de Mayo, el FREPASO había aumentado en cuatro puntos su intención de voto, mientras que el menemismo había disminuido en un punto su nivel de aceptación. La encuestadora Julio Aurelio se animaba a presagiar que, si bien todavía seguía lejos, Bordón estaba más cerca de forzar el ballotage.

El domingo 7, *Página 12*, en una nota titulada *La guerra del ballotage*, afirmaba que dos encuestadoras admitían la posibilidad de que Menem no fuera reelecto en primera vuelta y que tuviera que enfrentar en una segunda ronda electoral a Bordón, quien seguía creciendo a ritmo sostenido.

Las primeras planas de los diarios anunciando cambios en la intención de voto despertaron susceptibilidades e inquietudes dentro del oficialismo. Desde el gobierno, se empezó a hablar de conspiraciones, presionando –según *La Nación* de esos días- a un medio de comunicación para que no publicara encuestas demasiado favorables a Bordón.

A tono con tales preocupaciones, en campaña por Rosario, Menem solicitó a los radicales que votaran por su partido y descalificó a los encuestadores que auguraban un posible ballotage. También lo hizo con sus oponentes más cercanos, los frepasistas, al advertir que Álvarez era de ultra izquierda y Bordón era como Collor de Mello, un candidato que llegó a la presidencia de Brasil sin estructuras partidarias y que *ya se sabía cómo terminó*. Además criticó a los medios de comunicación por haber instalado el tema de los cortes de boleta, una estrategia que, evidentemente, no lo beneficiaba.

Por su parte, frente a la posibilidad del ansiado ballotage, Bordón negó toda posibilidad de hacer un pacto con otros partidos para una eventual segunda vuelta. Massaccesi, en cambio, se mostraba un poco más abierto al diálogo: sostenía que había que concertar antes de la segunda vuelta, aunque no dejaba de insistir en que el único discurso que polarizaba respecto del gobierno era el de la U.C.R. En realidad, lo que más dificultaba una potencial alianza entre ambos grupos eran sus diferencias en torno al tema de la convertibilidad.

En medio de un clima caracterizado por la guerra de las encuestas, para el viernes 12 de mayo, las esperanzas del ballotage se habían esfumado. Los principales encuestadores (Gallup, Mora y Araujo y Julio Aurelio) daban como ganador en primera vuelta a Carlos Menem con una proyección de entre el 47,2% y el 45,3%, seguido por Bordón con el 33%, y por último el radicalismo, con guarismos que rondaban entre el 14 y el 16%.

Por su parte, *Página 12* creaba, a dos días de las elecciones, ciertas expectativas favorables para Bordón: seis consultores consideraban que lo más probable era que no hubiera ballotage, pero aclaraban que el cuadro electoral era muy complicado como para asegurarlo terminantemente. Los indecisos y el humor social del domingo, eran dos claves que permitían dudar sobre los resultados finales.

La T.V. en campaña

Los tres partidos con mayores intenciones de voto invirtieron en campaña cerca de 50 millones de dólares, según información publicada por *La Nación* el 12 y 13 de mayo.

El que más gastó fue el partido gobernante, unos 30 millones de dólares, procedentes de tres fuentes: los aportes de empresarios, los de los particulares y los fondos partidarios, donde ocupan un lugar importante los 2,50 pesos por voto, adjudicados por ley, en función de los resultados de las elecciones legislativas de 1993. Así, el P.J. recibió 3.281.663 de pesos de fondos partidarios y cerca de 9 millones de aportes de empresarios, que mantuvieron en reserva sus nombres.

La U.C.R. gastó en su campaña alrededor de 15 millones de pesos, de los cuales unos 2 millones y medio provenían de los fondos partidarios y cerca de 3 millones de aportes empresariales. Según *La Nación* del 12 de mayo, un dirigente radical comentó que los grandes grupos empresariales se mostraron reticentes a realizar importantes aportes. Agregaba que, cuando le pidieron una entrevista a un directivo de una conocida automotriz, recibieron como rápida respuesta, con aire de mucho despiste y tono cargado de ironía:

- Cómo no. Llámeme el 18 de mayo.

El FREPASO, tercer grupo entre los que más invirtieron, gastó 4 millones de pesos. Por tratarse de una fuerza de reciente formación, no recibió fondos partidarios, sino simplemente aportes de particulares y empresarios. Si bien al principio éstos fueron modestos, alrededor de 20 mil pesos, fueron incrementándose un poco, en la medida en que las encuestas comenzaron generar expectativas sobre las posibilidades de Bordón para acceder a una segunda vuelta.

Con dichos recursos, las campañas se llevaron a cabo principalmente en la televisión, donde el P.J. hizo siete horas de televisión propaganda, sin contar con los programas de conductores que le eran adictos, contra 2,5 horas de la U.C.R. y 43 minutos del Frepaso.

Los afiches y los avisos en los medios gráficos disminuyeron notoriamente respecto de otras campañas. Asimismo, pudo advertirse una baja en publicidad directa que parece haber sido compensada por la asidua concurrencia de los candidatos a diferentes programas de televisión.

El politólogo Natalio Botana, escribía por entonces en *La Nación*, que la sociedad argentina asistía a un fenómeno de proyección mundial. En la política posmoderna, el imaginario del espacio político –decía- se juega en las entrevistas de televisión, aunque, en nuestro país, a diferencia de naciones como Francia o Estados Unidos, los candidatos no debaten. La televisión –continuaba Botana- es el escenario donde las ideas no se confrontan, se muestran. Como el votante no va a los actos de los candidatos, éstos van a la casa de los votantes como invitados de programas políticos y de entretenimientos.

Como prueba de lo expresado, los menemistas no terminaban de decidirse acerca de dónde debía realizarse el cierre de campaña. Dudaban si hacerlo en el programa de Mirtha Legrand o en una caravana por Florencio Varela. Justamente, en ese distrito del Gran Buenos Aires, Rubén Juárez, un integrante de la mesa de conducción de Compromiso Justicialista, denunció que fue amenazado por funcionarios de la intendencia por propiciar el corte de boleta a favor de José Octavio Bordón-Presidente y Duhalde-Gobernador. Según su testimonio, luego de

recibir una feroz golpiza y de que le pusieran un arma en la sien, le dijeron: - Si seguís con esto, antes del 14 sos boleta.

Otra de las advertencias fue un incendio en la sede del FREPASO, cuatro días antes de las elecciones. Según lo confirmara el juez Mariano Bergez, el incendio había sido intencional. Desde el gobierno, relativizaron el hecho: el Ministro Carlos Corach calificó de vándalos a los agresores, mientras que otros funcionarios hablaron de autoatentado. Por su parte, Bordón intentó tomarse el episodio con humor. Dijo: - La segunda vuelta la vamos a tener que hacer en un camión blindado. En la conferencia de prensa que ofreció el 9 de mayo, Bordón le atribuyó al justicialismo la estrategia del miedo y la mentira para el último tramo de la campaña electoral, y convocó a que en las elecciones del domingo la ciudadanía no vote con miedo.

El FREPASO culminó su campaña con una caravana desde Liniers hasta el Obelisco. Quiso cerrarla en el distrito que le parecía fundamental para sus aspiraciones de forzar una segunda vuelta. En un marco bullicioso y con gran asistencia de simpatizantes, su líder, Bordón, afirmó que estaba creciendo una nueva Argentina que tenía esperanza en lugar de miedo. Prometió que, si llegaban al gobierno, no iba a haber venganza pero tampoco impunidad; lo que iba a haber era justicia.

Por su parte, el postulante por el partido radical, Horacio Massaccesi, recorrió numerosas localidades del interior del país. El acto de clausura de la campaña de la U.C.R. se realizó en la Plaza de Mayo. Allí hablaron Alfonsín, De la Rúa, Hernández y el candidato a presidente. El que virtió los comentarios más duros fue Raúl Alfonsín, quien dijo que *a Menem lo votarán la derecha y los pobres*, para luego agregar que, si esto se confirmaba, la sociedad y no los radicales era la que se habría corrido a la derecha.

Una probable reelección con apoyos heterogéneos

Datos de elecciones previas, permitían presagiar que Menem recibiría los votos de los más pobres, identificados históricamente con el peronismo. También, el apoyo

de los más ricos, como ya había sucedido en las elecciones de 1993. En declaraciones a la prensa, representantes de grandes grupos empresariales optaban nuevamente por el rumbo elegido por el Presidente.

El voto de distintos sectores empresariales del agro, a pesar de discursos críticos de algunos de sus dirigentes, se inclinaba nuevamente a favor del menemismo, acentuando incluso la tendencia que ya se había marcado en las elecciones del `93. Ámbito Financiero afirmaba el 16 de mayo que había sido justamente el sector rural el que jugó un rol definitorio para el triunfo de la fórmula Menem-Ruckauf. Para este medio, representativo del poder económico, Bordón todavía constituía un proceso urbano, incapaz de captar el voto-reclamo o el voto castigo del interior.

Menem también generaba simpatías dentro de las Fuerzas Armadas. Los uniformados consideraban a Bordón y Massaccesi como candidatos poco atractivos. Y aunque el presidente Menem les había reducido las partidas presupuestarias y no les otorgaba aumentos salariales desde hacía dos años, Bordón no era para ellos una opción posible ya que en el FREPASO están la izquierda y los organismos de derechos humanos. De este modo, dentro de este sector primaba el voto ideológico por sobre el económico.

Pese a estas percepciones, no todos los grupos de Derechos Humanos apoyaban al FREPASO. En *Página 12*, dos días antes de las elecciones, apareció una solicitada de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, donde señalaban que ninguno de los candidatos decía algo distinto y que las Madres no aceptaban que se *las obligara* a votar lo menos malo. En realidad, su crítica no iba dirigida sólo a la falta de candidatos, sino a una democracia a la que consideraban ficticia, *donde se le hace creer al pueblo que decide su destino en las urnas, mientras todo se resuelve a escondidas*.

Entretanto, *La Nación* publicaba en los días previos a las elecciones, los resultados de una encuesta que se había realizado entre jóvenes acerca de su primera experiencia en elecciones presidenciales. Con el título *Muchos jóvenes aún no saben a quién votar*, se afirmaba que el 14 de mayo votarían por primera vez en las elecciones presidenciales 1.600.000 jóvenes cuyas edades oscilaban

entre 18 y 20 años, lo que significaba un 7% de los inscriptos en el padrón electoral. Más del 66% aseguró que votaría aunque no fuera obligatorio. El tercio restante dijo que no le interesaban las elecciones y que no querían tener ese compromiso. En ese momento, según la encuesta, la mayor preocupación de los jóvenes giraba en torno al desempleo. Un 70% lo señaló como la principal cuenta pendiente. El motivo era que, entre ellos, había un 28% de desocupados, más del doble que en el resto de la población.

Para algunos analistas, el voto de los jóvenes era el más difícil de captar por su desinterés y decepción hacia la clase política.

El soberano se expide

Entre sondeos de opinión, expectativas por el ballotage, propuestas y campañas electorales, llegó por fin el día en que se develaría la justeza de pronósticos, certezas e incertidumbres. Desde las primeras horas del domingo 14 de mayo, millones de argentinos y argentinas se movilizaron para elegir a quienes dirigirían los destinos del país en los cuatro años subsiguientes.

Al final de la jornada, las encuestas que vaticinaban el triunfo de Menem en primera vuelta se hicieron realidad. Los ciudadanos dieron amplio apoyo al justicialismo en las presidenciales, pero además en la mayoría de las gobernaciones que estaban en juego en diferentes provincias, así como en las cámaras legislativas que renovaban la mitad de sus miembros.

Con respecto a las gobernaciones, en la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde fue reelecto, superando su performance del '91 y consolidando un liderazgo que utilizaría como trampolín para las elecciones presidenciales del '99. Pese a ello, en su conferencia de prensa se mostró moderado, sin esbozar sonrisa alguna y felicitando a la formula Bordón-Álvarez por su muy buena elección. El gran perdedor de la jornada fue el MODIN de Aldo Rico que redujo su caudal de votos en 8 puntos.

Los gobernadores justicialistas Néstor Kirchner en Santa Cruz; Rubén Marín en la Pampa y Adolfo Rodríguez Saá en San Luis también fueron reelectos, obteniendo resultados superiores al 55%. Este último se impuso por cuarta vez consecutiva, superando todo un récord de permanencia en el poder provincial.

Además fueron elegidos por el P.J., Carlos Juárez en Santiago del Estero y Ángel Maza en la Rioja, quien con el apoyo del ministro de economía, Domingo Cavallo, le ganó a otro justicialista, Bernabé Arnaudo. Y en Mendoza, tierra natal de Bordón, no alcanzó el acuerdo que éste hiciera con el radical Víctor Fayad para vencer a quien lo había acompañado en la gobernación, el justicialista Arturo P. Lafalla.

En Catamarca, el Frente Cívico y Social de Arnoldo Aníbal Castillo se impuso a la fórmula de Ramón Saadi, bajo la consigna *Nunca más volver al pasado*. La debacle de Saadi comenzó en 1991 cuando Menem intervino la provincia a raíz de las derivaciones del *caso María Soledad Morales*. En Córdoba, el radical Ramón Mestre se impuso, sucediendo a su correligionario Eduardo Angeloz que venía gobernando la provincia desde hacía once años. Sin embargo, en las presidenciales, los cordobeses no acompañaron al radicalismo, otorgándole la victoria a Menem. Al parecer, ello puede haber sido causado por una crisis financiera que atravesaba la provincia. El malestar resultante se habría exteriorizado en los comicios, donde además la ausencia de los presidentes de mesa se interpretó como una protesta espontánea de docentes y empleados públicos por sus sueldos atrasados.

La provincia de Río Negro, tierra natal de Massaccesi, y la de Chubut, continuaron con administraciones radicales, con la elección de Pablo Verani y la reelección de Carlos Maestro, respectivamente. Pero, al igual que ocurriera en Córdoba, en estas provincias, el menemismo se impuso para las presidenciales. En Chubut, el corte de boleta se anunciaba como tan importante que Maestro solicitó a la justicia electoral que proveyera de tijeras a las 842 mesas habilitadas. A pesar de que el tribunal consideró improcedente el pedido, la Junta dejó sujeta a la libre decisión de los votantes el hecho de portar o no tijeras. La población llevó sus propios instrumentos, abandonándolos u olvidándolos en muchos casos dentro del mismo cuarto oscuro.

Con respecto a la Cámara de Diputados, en la Capital Federal, los porteños insistieron con su decidido perfil opositor. El FREPASO realizó una muy buena elección demostrando que su triunfo de 1994 (para las elecciones de convencionales constituyentes) no había sido una casualidad y aumentando su caudal de votos a costa de un radicalismo que se hundía cada vez más. El partido de Bordón y Álvarez se impuso en los barrios de clase media, mientras que perdió ante Menem en los barrios más humildes y en los más acomodados, como Villa Lugano y Recoleta, respectivamente.

El distrito capitalino fue el único lugar del país donde el FREPASO logró ganarle a Menem, consiguiendo cinco bancas de diputados, frente a tres del P.J. y tres de la U.C.R. Álvaro Alsogaray, con 81 años, fue reelecto y retuvo su banca de diputados por cuarta vez consecutiva a la cabeza de la U.Ce.Dé. Pero, para comprender el complejo espectro político de la Capital, es necesario señalar que el diputado que más votos cosechó fue Alfredo Bravo. Con el 35% de los sufragios, renovó su banca, presentándose como candidato de una alianza entre su partido, la Unión Socialista, y el FREPASO.

Las elecciones cambiarían, a partir de diciembre, la configuración de la Cámara de Diputados. Con un 43% de los votos para diputados nacionales en todo el país, el justicialismo logró sumar 7 escaños a los 125 que ya tenía, lo que le permitiría tener quórum propio sin necesidad de apelar a los partidos provinciales. Según el diario *Página 12* del 16 de mayo, el presidente del bloque justicialista Jorge Matzkin, tendría que cuidar más su frente interno que la relación con las bancadas opositoras. Las contradicciones existentes entre los dos hombres fuertes del justicialismo (Carlos Menem y Eduardo Duhalde) podían tener en el futuro alguna expresión en la bancada oficialista, ya que el gobernador de la provincia de Buenos Aires controlaría alrededor de 50 de los 132 diputados que la integraban. Por otra parte, tanto el FREPASO como la U.C.R. obtuvieron algo más del 21 % del de los votos del electorado para diputados a nivel nacional, pero mientras que el radicalismo sufrió una merma importante de escaños en la cámara baja (de 83 pasó a tener 70), el FREPASO aparecía con una relativa fuerza pues logró sumar

13 miembros a los 14 que ya tenía. Y serían presididos por Carlos *Chacho* Álvarez.

No todas fueron buenas noticias para el justicialismo pues, tanto el MODIN como la U.Ce.Dé. perdieron 2 bancas cada uno, mientras que las fuerzas provinciales perdieron 4, conservando sólo 20 bancas. Este conglomerado de partidos, según *Página 12* del 16 de mayo, actuaba por lo general en Diputados como apéndice del oficialismo, lo cual le otorgaba un resto al justicialismo para cubrir eventuales deserciones de la tropa propia.

Con respecto al Senado, las cosas no cambiaron mucho. Aunque el justicialismo alcanzó una amplia mayoría en la cámara alta, los números indicaban que estaría obligado a negociar con representantes de otros bloques a la hora de conseguir los 2/3 para aprobar proyectos de ley o normas especiales: un tema no menor, dada la necesidad de avanzar con las medidas de profundización del modelo neoliberal.

Según la Constitución reformada en 1994, las nuevas mayorías en la legislatura tenían derecho a colocar dos representantes en el Senado mientras que un tercero quedaba para la primera minoría. Como resultado de ello, en diciembre, se incorporarían 24 senadores a los 48 ya existentes. El P.J. contaría con 39, la U.C.R. con 19, mientras los restantes 14 senadores se distribuían de la siguiente manera: 2 por el Frente Cívico y Social (Catamarca), 2 por el Movimiento Popular Neuquino (M.P.N.), 2 por el Partido Autonomista Liberal (P.A.L.), 2 por el Movimiento Popular Fueguino (M.P.F.), 1 por el FREPASO, 1 por la Cruzada Renovadora (San Juan), 1 Bloquista (San Juan), 1 por la Fuerza Republicana (Tucumán), 1 por el Partido Renovador de Salta y la última banca para quien resultara electo en Capital Federal por el voto directo.

A modo de un balance general, podemos decir que, a diferencia de las elecciones anteriores y contra los extendidos augurios, se rompió el bipartidismo al constituirse el FREPASO como una fuerza importante. A pesar de no contar con un proyecto claro, la nueva agrupación logró imponerse sobre una U.C.R. muy devaluada.

Otra apreciación que se puede realizar es la pobre performance electoral de la izquierda, que no logró canalizar a un importante sector del electorado que, si bien disconforme con las políticas económicas del menemismo, no se había radicalizado al punto de acompañar sus programas y consignas.

¿Resultados paradójicos?

- ¿ Y por qué tenía que festejar?, se sorprende Luis, de 34 años, mientras remueve aburrido el maní en el sartén de garrapiñada.
- Estamos mal y vamos a seguir mal igual. Si estuviéramos bien, yo no estaría vendiendo maní en la calle. Luis le dio su voto a Menem porque después de todo, le queda una pequeña esperanza.
Pero ganas de celebrar, lo que se dice ganas, no tenía.
Página 12, 15 de mayo de 1995

Los diarios de la mañana siguiente a las elecciones discrepaban en torno a la cantidad de gente que se reunió el 14 de mayo por la noche en la Plaza de Mayo. Tampoco había acuerdo sobre el grado de entusiasmo o de apatía de los movilizados. Pero, en realidad, lo que resultaba innegable era que el triunfo del menemismo no había provocado algarabía ni grandes manifestaciones populares. Podríamos afirmar que sólo unos pocos estaban contentos y hasta felices: obviamente nos referimos a los liberales, así como a los grandes empresarios y banqueros (los *mercados* como se los nombraba en la época) que pronto expresaron su satisfacción, muy a su manera, es decir con la suba de los valores de bonos y acciones.

Entretanto, en las filas opositoras cundía la tristeza y la desesperanza. Entre los radicales, porque su declinación parecía no tener dique: habían sido desplazados del segundo puesto por el FREPASO, una alianza de reciente conformación. El centenario partido de Alem entró en rápida deliberación. Llovían críticas más o menos veladas sobre Raúl Alfonsín y el candidato Horacio Massaccesi, entremezcladas con otras que responsabilizaban a la sociedad por no entender sus propuestas. Sólo Fernando de la Rúa se animaba a manifestar optimismo,

pero respecto de las elecciones que pronto se realizarían para la gobernación de la Ciudad de Buenos Aires: creía en su triunfo y en el de su partido.

En el FREPASO, sus líderes se esforzaron por resaltar la importante elección realizada, así como el excelente futuro de una coalición que -aseguraban- no sería una flor de verano. Sin embargo, en las bases frepasistas, la alegría por haber obtenido más de cinco millones de votos no lograba contrarrestar un intenso sabor amargo, provocado por la constatación de que tamaña performance electoral no bastaba para terminar con un régimen al que consideraban corrupto y antipopular. Ya no podrían argumentar, como en 1989, que amplias franjas de la sociedad habían sido engañadas por el discurso populista del candidato Menem. En la campaña de 1995, el Presidente llamaba a su reelección, ya no prometiendo como en 1989 Revolución productiva y Salariazo, sino levantando las banderas de la economía popular de mercado. Ante la sorpresa y el descorazonamiento de muchos, casi la mitad del electorado argentino de alguna manera refrendaba lo actuado desde 1989, ofrecía su apoyo a la continuidad de las políticas neoliberales y hacía la vista gorda respecto de las gravísimas acusaciones de corrupción que recaían sobre altos funcionarios del gobierno, rozando mismo la figura de Menem.

Más allá de estos estados de ánimo y quizás para explicarlos, vamos a tratar de acercar el foco a procesos que estaban desarrollándose por aquellos años. De este modo, las paradojas de las que habláramos al comienzo de este trabajo quizás no resulten tan paradójicas, sino respuestas muy lógicas en el contexto político, económico, social y cultural de la época, en la Argentina y el mundo.

Buscando causas: ¿por qué el triunfo del menemismo?

Sabemos que el oficialismo ha instrumentado este miedo.

Sabemos que su mensaje indisimulado y, sin duda,
más efectivo ha sido: "Nosotros o el caos".

José Pablo Feinmann

El triunfo menemista del '95 venía precedido por las victorias del P.J. en 1991 y 1993. Tuvo lugar bajo las reglas de juego establecidas en la reforma constitucional

de 1994, acordadas fundamentalmente entre el P.J. y la U.C.R. Entre otras cosas, tal reforma permitió que el carismático Menem se presentara como candidato del P.J. para un segundo mandato presidencial. Pero, ¿explica por sí sola la peculiar personalidad del riojano el triunfo del justicialismo en 1995?

Dice Liliana De Riz (1995) que, en las elecciones para la renovación parcial de la Cámara de Diputados, ocurridas en 1993, el P.J. triunfó como lo venía haciendo en 1987, 1989 y 1991. La lealtad de los peronistas al partido se mantuvo pese al drástico giro que Menem emprendió respecto de las políticas tradicionales del peronismo. Desde 1983, los votantes peronistas se mantuvieron estables, entre el 36 y el 38% del total, cifras que son consideradas como el piso del electorado peronista de la última década. Este dato confirma el hecho de que la identidad peronista no se basa en programas o políticas definidas, sino que descansa en la memoria de valores como la justicia social y un estilo de liderazgo, combinación de lealtad y eficacia, carisma y pragmatismo, instituido por Perón y replicado por Menem. Desde 1989, los apoyos electorales a Menem fluctuaron de acuerdo con las oscilaciones de los votos del electorado que no es tradicional votante peronista. Los datos de 1993 sugieren la formación de una coalición electoral menemista que reúne a los de arriba y a los de abajo de la escala social.

Estas anotaciones de De Riz sobre el peso de la identidad peronista en el comportamiento electoral quizás resulten también válidas para interpretar -en parte- el triunfo del menemismo en 1995. Y decimos en parte, porque la misma autora sostiene que las elecciones (de 1995) se llevaron a cabo en un contexto definido por (la polarización) entre un gobierno, paradójicamente beneficiado por el buen manejo de las consecuencias inmediatas de la crisis mexicana, que presentó su continuidad como garantía contra el caos, y una oposición que no pudo dar garantías de que "la historia no volvería atrás". En la misma línea, otros analistas subrayaron el peso del voto cuota para explicar ciertas decisiones electorales en favor del partido gobernante. El endeudamiento de muchos ciudadanos por la compra a crédito de distintos bienes, les impedía aventurarse con partidos de oposición que no les resultaban totalmente confiables a la hora de mantener la estabilidad económica: el FREPASO se les aparecía sólo

como el adalid de la protesta social; la U.C.R. no lograba desprenderse de la imagen de fracaso con que concluyó su gestión de gobierno en 1989.

A esta altura, podríamos preguntarnos: ¿A qué caos aludían los propagandistas del régimen? ¿Qué miedos individuales y colectivos atizaban cuando blandían el fantasma del caos? ¿Cuál era el pasado al que no se debería volver? ¿A qué le temía la sociedad? ¿Qué fantasías se alimentaban en favor de la continuidad? Responder a estas cuestiones nos obligará a realizar un recorrido entre 1989 y 1995, es decir por los años de la primera presidencia de Menem.

De la revolución productiva y el salariazo al endiosamiento del mercado

Nosotros iniciamos un poco el proceso de enseñanza, de maduración, de lo que era la orientación moderna de una economía productiva. Y al final, después del '89, la gente misma pedía esa orientación. Y yo creo que ese es el espíritu que capta Menem cuando asume la Presidencia. Cavallo y los ministros que lo antecedieron fueron también en ese sentido. Dieron la orientación económica en líneas, en las grandes líneas, en las grandes bases, que eran prácticamente las mismas que las nuestras.

José Alfredo Martínez de Hoz, entrevista de la Revista Tres puntos, 25 de septiembre de 2002

Carlos Saúl Menem ganó las elecciones de 1989 bajo las consignas de *Revolución Productiva y Salariazo*, es decir desde banderas que se entroncaban con las tradiciones históricas del peronismo.

Las elecciones se desarrollaron en medio del caos y el desprestigio del gobierno del radical Raúl Alfonsín, provocados ambos por un proceso hiperinflacionario que licuaba, segundo tras segundo, los ingresos de los asalariados, instalando el terror del hambre y el pánico entre todos los que vivían de un empleo, así como entre pequeños comerciantes y propietarios de talleres artesanales.

Ahora bien, ¿por qué se produjo la hiperinflación? A la salida de la dictadura, la sociedad argentina se encontró con una pesada herencia. Entre sus variadas consecuencias, queremos subrayar el hecho de que la clase política, en virtud de

las transformaciones económicas y el endeudamiento externo provocados por el tándem Videla-Martínez de Hoz, perdió importantes márgenes de autonomía respecto del poder económico. Esa clase política había quedado cautiva de los nuevos grupos dominantes configurados al calor de las políticas de la dictadura, y su suerte estaba echada al menos que optara por denunciar esta situación y lograra el apoyo popular para enfrentarlos.

El nuevo sector dominante del que hablamos estaba formado –según Eduardo Basualdo (2001)- por grandes grupos económicos locales, como Macri, Pérez Companc, Loma Negra o Roggio; por un conjunto restringido de conglomerados extranjeros, como Techint, Bemberg y algunas empresas automotrices; y finalmente, por los acreedores externos.

La decisión del gobierno de Raúl Alfonsín de favorecer a los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros con inserción local; su dificultad, desde 1988, para "honrar la deuda" (vastamente propagandizada por el ex funcionario de la dictadura Domingo Cavallo, ante las autoridades norteamericanas y los organismos internacionales de crédito), alentaron a los acreedores externos a poner en marcha un golpe de mercado. Se trataba de una nueva forma de golpe destinada a sembrar el caos y el desprestigio de las autoridades elegidas democráticamente, si éstas no se avenían a cumplir con sus designios. La nueva forma de intervención destituyente no venía acompasada por el tradicional ruido de espadas y fusiles, tampoco por los ritmos marciales de las marchas militares. La nueva forma de golpear se caracterizaba por el deterioro desenfrenado del valor del peso, los aumentos consecuentes de los precios de los productos de primera necesidad, la especulación, el mercado negro, la desesperación y los saqueos de comercios y supermercados (estimulados además por los punteros del P.J.).

Fue en tal contexto hiperinflacionario que Menem ganó las elecciones de 1989, levantando consignas, como "Revolución productiva y salariazo", que parecían rescatar principios históricos del peronismo. Sin embargo, a pesar del amplio apoyo electoral recibido, el nuevo presidente y su partido no quedarían al abrigo de las presiones de las distintas fracciones de los sectores dominantes. Prueba de

ello es que la decisión de colocar en el Ministerio de Economía a un hombre de la multinacional Bunge y Born (representativo de los grandes grupos económicos locales) desató, en diciembre de 1989, otro golpe hiperinflacionario que, sólo se detuvo ante el compromiso asumido por el nuevo gobierno de aplicar las políticas neoliberales reclamadas por los acreedores externos.

Pronto se haría evidente que, el pánico generado por la hiperinflación no sólo ejercía un brutal poder disciplinador sobre la sociedad –colocada en disponibilidad para aceptar lo hasta hacía poco inaceptable-, sino también sobre la dirigencia política y sindical que, mediante estos crueles métodos, no sólo era presionada para retomar los pagos de la deuda externa, sino también para impulsar transformaciones profundas en el modelo económico, la forma de Estado y el régimen político.

La nueva corrida cambiaria y la hiperinflación consecuente —y no los pedidos de la gente de los que habla Martínez de Hoz- fueron los que llevaron entonces a Menem a remover a su equipo económico y reemplazarlo por otro conducido por un hombre de su confianza, el contador riojano Erman González. Prestamente, el nuevo ministro, atendiendo a los requerimientos de los acreedores externos, capturó compulsivamente los plazos fijos, el dinero de las cajas de ahorro y la deuda interna, a cambio de títulos públicos en dólares pagaderos a diez años (Plan Bonex); saneó las cuentas públicas, liberalizó los mercados de cambios; renegoció la deuda externa y puso en marcha el proceso privatizador de las empresas estatales.

Al compás de la aplicación de las reformas neoliberales, el Presidente se recortaba las patillas, abandonaba su poncho riojano e iba dejando de lado su look de caudillo montonero para reemplazarlo por el que lucían los poderosos. Personajes conspicuos de la U.Ce.Dé., como su líder Álvaro Alsogaray, su hija María Julia o la locuaz Adelina Dalesio de Viola, y periodistas de la derecha liberal (como Mariano Grondona y Bernardo Neustadt), lucían exultantes y fingían sorpresa ante el giro que habían tomado los acontecimientos: el odiado peronismo era el que ahora les abría las puertas del gobierno a los Alsogaray y otros exponentes de la U.Ce.Dé.; el odiado peronismo, ese que al que habían

combatido ferozmente con todo tipo de armas, era el que "paradójicamente" venía a cumplir con su programa.

En este contexto, no resulta extraño que el presidente se afanara por proclamar la reconciliación entre peronistas y antiperonistas, uniéndose en un histórico y para algunos patético abrazo con uno de los iconos del golpe que destituyera a Perón en el '55, el Almirante Isaac Rojas. Tampoco resulta extraño que Menem se lanzara a cicatrizar viejísimas —y no sabemos hasta qué punto vigentes- heridas entre rosistas y antirrosistas, así como otras abiertas como llagas, entre genocidas y víctimas del Terrorismo de Estado: el 28 de diciembre de 1990, en el Día de los Inocentes, luego de una manifestación cívica multitudinaria contra la intención del gobierno de indultar a los responsables de crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura, Menem firmó el decreto de indulto para los máximos responsables militares y civiles del genocidio.

¿Cómo no reconciliarse con la dictadura y con los liberales golpistas del '55, si su programa socioeconómico era el de los Martínez de Hoz, los Rojas y los Alsogaray?

Tal programa fue profundizado desde 1991 con la llegada al Ministerio de Economía de Domingo Felipe Cavallo. Miembro de la Fundación Mediterránea, recientemente ingresado al P.J., el ex funcionario de la dictadura que había estatizado en 1982 una parte de la deuda de las empresas privadas, llegó al cargo de ministro rodeado de los laureles de su graduación en Harvard y revestido del aura de brillante técnico que, actuando por encima de los intereses sectoriales, se ocuparía del bienestar general. En nombre del mismo, impulsó el plan de convertibilidad, estableció un tipo de cambio fijo con el fin de estabilizar el nivel de precios, puso en marcha la apertura comercial, eliminando o disminuyendo selectivamente los impuestos a la importación, reformó la ley de empleos legalizando la contratación de mano de obra temporaria, limitando el derecho de huelga y reduciendo las indemnizaciones por despidos. Asimismo, se abocó a reformar profundamente el Estado mediante la privatización de las empresas públicas (ver Anexo), los cambios en el sistema impositivo y en la seguridad social, la federalización y el traspaso de funciones a las provincias.

¿Qué pasaba en tanto en el Parlamento, cómo respondían a estos drásticos cambios la oposición radical y los oficialistas? ¿Y cómo reaccionaban los líderes sindicales de la C.G.T. ante el avasallamiento de los derechos laborales?

Para algunos analistas, la oposición radical se sentía inhibida para hacer críticas a la gestión menemista, como consecuencia del deterioro sufrido por su partido al tener que irse anticipadamente del gobierno, en medio del incendio hiperinflacionario. Otros, más críticos, como Horacio Verbistky, le enrostran su colaboración en la política económica que llevó a cabo Menem. Dice Verbistky que aún cuando (el radicalismo) tenía mayoría en la Cámara le votó a Menem todas las leyes que permitían el desguace del Estado.

Alberto Aramouni, diputado nacional por la Democracia Popular entre 1987 y 1991, sostuvo en la película documental *Memoria del saqueo* (2004): *Fue un verdadero ataque a la democracia la forma en que este Parlamento trató las leyes en la era Menem.* Le otorgó al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias, poderes omnímodos, la suma del poder público. Las delegaciones le permitían al Poder Ejecutivo privatizar todas las empresas del Estado, sin inventario, sin balance, sin certificar si realmente esas empresas arrojaban ganancias o arrojaban pérdidas. Significó ni más ni menos, la votación, un verdadero apoyo al saqueo de los bienes del Estado. Las votaron los justicialistas con la honorable complacencia radical.

Dando testimonio para el citado documental, Armando Vidal, cronista parlamentario del diario "Clarín", dijo: pocas veces se van a dar tantos factores para que una minoría tome el poder sin tirar una bomba como lo hicieron, sin disparar un solo tiro. Esto surge claramente en la participación de Álvaro Alsogaray en el tema de la ley de Reforma del Estado. El instrumento que le está dando el poder a Menem, un poder absoluto, dictatorial, un poder que no tenía Videla, que no tuvo Videla. Se los estaba diciendo Alsogaray: les decía a los propios justicialistas que estaban participando de un capítulo extraordinario. Por primera vez (los liberales) iban a tener el poder. No importa si los votos eran del pueblo o votos peronistas, ese poder lo iban a tener los mismos que proscribieron, los mismos que fusilaron, los que masacraron, eso es lo que estaba diciendo.

¿Hasta dónde es el límite? ¿Qué cosas eran capaces de hacer? Bueno, esto y más. Es más siguieron haciéndolo porque acá (se refiere al Parlamento) hubo denuncias sobre la privatización de Y.P.F. Hubo denuncias: el diputado Luis Saadi dijo que en el Senado habían pagado una coima de ocho millones de dólares. Después se corrigió, en la misma sesión.

Por su parte, la dirigencia sindical, salvo honrosas excepciones, fue haciendo propio el discurso neoliberal, avalando la modificación de las leyes laborales. Valga recordar la convicción con que Armando Cavalieri (Secretario General de los Empleados de Comercio) defendía el achicamiento del Estado y al dios *Mercado* en los programas televisivos de Grondona, Neustadt y Longobardi. ¿La contrapartida para tamaña argumentación que daba la espalda a los intereses de los trabajadores?: ni más ni menos que la participación sindical en las privatizaciones.

Mientras los hechos de corrupción salpicaban a personas muy cercanas al Presidente y gran parte de la dirigencia política y sindical tiraba por la borda una historia de luchas y resistencias, la política se farandulizaba y funcionarios y propagandistas del régimen, entre *pizzas y champagne*, se vanagloriaban del rumbo elegido. El derrotero incluía el establecimiento de *relaciones carnales* entre la Argentina y los Estados Unidos. La completa subordinación de la Argentina a la principal potencia económica y militar del planeta llegó hasta el punto de tomar participación en el conflicto que los norteamericanos mantenían en el Golfo Pérsico, trastocando una de las constantes históricas de la política exterior argentina, basada en la no intervención. Consecuencia de tales decisiones y de otros compromisos que Menem aparentemente no cumplió con el mundo árabe fueron, según algunas interpretaciones, la voladura de la Embajada de Israel en Buenos Aires (1992) y, poco tiempo después, en 1994, de la Asociación Mutual Israelita Argentina (A.M.I.A.).

Impregnándolo todo, desde los grandes medios, en los intersticios que dejaban Mirtha Legrand, Susana Giménez, Marcelo Tinelli y otras brillantes estrellas especializadas en la distracción, se filtraba el discurso sobre las bondades de la

globalización, la superioridad del dios mercado por sobre el demonizado Estado y el fin de la historia con el advenimiento de su última etapa, la del capitalismo triunfante. Un discurso único que descalificaba por arcaica y anacrónica toda idea que reivindicara la intervención estatal, el Estado benefactor, la independencia económica o que se animara a manifestar prevenciones respecto de *las relaciones carnales*, la globalización o el capitalismo. *Te quedaste en el '45* era la frase que se decía con sorna a todo aquel que manifestara dudas sobre el rumbo elegido, dudas que, por lo general, eran expresadas tímidamente en medio de la crisis en que estaban sumidos los paradigmas de transformación social con la caída de los socialismos reales. La frase, denostadora de todo pensamiento crítico, permeaba desde los altos funcionarios y periodistas del régimen hacia abajo, obturando discusiones que solían darse entre ciudadanos interesados en el acontecer político, nacional y mundial.

Un consenso de pocos para muchos

Lo que sucedía en Argentina, tenía proyección mundial. Desde mediados de la década de 1970, los grandes poderes económicos internacionales entraron a cuestionar y limar las bases sobre las que se sustentaba el Estado de bienestar keynesiano. Como contrapartida, por diversos y potentes medios, pregonaban las bondades del libremercado. Desde fines de la década de 1980, la disgregación del bloque soviético, dejó al capitalismo sin el contrapeso que lo había llevado, según Eric Hobsbawm (1998), a aceptar las regulaciones del Estado y una política de compromiso con la clase trabajadora. Liberado de esas trabas y favorecido por las transformaciones tecnológicas en las comunicaciones, lanzó una batalla contra los Estados nacionales, el movimiento obrero y los derechos de los trabajadores.

El capital necesitaba un mundo desregulado, para mover libremente sus capitales, comprar y vender sin restricciones, y localizarse donde pudiera extraer sin controles y al más bajo precio los recursos de la naturaleza, así como para contratar mano de obra barata, precarizada y flexibilizada.

Estas ideas se condensaron en el denominado Consenso de Washington, un acuerdo celebrado en 1989/1990 en la capital del Imperio, entre los representantes del Departamento de Estado norteamericano, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los presidentes de los bancos privados más poderosos del mundo y los ministros del Grupo de los Siete (G7) que congregaba a los países industrializados con mayor peso económico, político y militar a escala global. Esos países eran Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Gran Bretaña.

El Consenso obligaba a los firmantes a que sólo otorgarían ayuda financiera a los países endeudados que adoptasen las políticas por ellos *sugeridas*, a saber:

- reformar el Estado minimizando sus funciones sociales, como salud y educación;
- privatizar las empresas de servicios públicos;
- enajenar las reservas energéticas;
- otorgar facilidades a las inversiones extranjeras;
- liberar el sistema financiero;
- aumentar la recaudación impositiva;
- reducir el déficit fiscal.

Eran, en síntesis, las ideas de la llamada economía de libre mercado, que buscaba acabar con el patrón de desarrollo basado en la intervención estatal, las políticas proteccionistas del sector industrial, la redistribución del ingreso y la promoción del mercado interno

Los gobiernos de Ronald Reagan (1981-1989) en Estados Unidos y de Margaret Thatcher (1979-1990) en Gran Bretaña se convirtieron en referentes internacionales de estas políticas, articuladas a nivel ideológico por la corriente monetarista y las propuestas de su máximo exponente, Milton Friedman, premio Nobel de Economía en 1976.

En la periferia, el Consenso de Washington se impuso por la presión de la deuda externa y la necesidad de financiamiento. (Mazzeo, 2002 y 2006). En relación con esto, es impactante observar que el derrotero seguido por Menem en Argentina,

fue muy similar al que recorrieron otros presidentes latinoamericanos electos a fines de los '80, como los de Venezuela, Brasil, Perú o Bolivia. En todos estos casos, una vez que los nuevos mandatarios asumieron el gobierno, abrazaron como propios el programa neoliberal y los postulados del Consenso de Washington que tanto habían criticado durante sus campañas electorales.

Una diosa con pies de barro: la tan ansiada estabilidad

Volviendo a la Argentina, las reformas estructurales que puso en marcha Cavallo, dejaron libre el camino para una nueva renegociación de la deuda externa. En 1992, el superministro en que se había convertido Cavallo, selló el acuerdo con el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Nicolás Brady. A partir de entonces, los préstamos volvieron a fluir hacia la Argentina, debiendo agregarse otra inyección de dólares producto de las privatizaciones. Mientras las distintas fracciones del sector dominante hacían las pases, articulando sus intereses detrás del gran negocio de las privatizaciones, comenzó a esbozarse un crecimiento económico con baja inflación, que era traccionado por el aumento de la producción de bienes agropecuarios, de la pesca, el petróleo, los minerales, los servicios, así como de la actividad de ciertas industrias, como las productoras de acero y aluminio primario. (Filadoro, A., 2006)

Esta "primavera" perduró hasta 1994. El ingreso de capitales produjo un masivo shock de confianza. La clase media vivió una cierta euforia económica. Como en los tiempos felices de Martínez de Hoz, volvieron las compras en cuotas y los viajes al exterior, agregándose el boom de las tarjetas de crédito.

En medio de esta sensación de riqueza, que pronto se demostraría ficticia, aparecían algunos signos preocupantes, quizás no tan visibles para la mayoría de la ciudadanía, ni muy presentes en la agenda de noticias de los principales medios de comunicación. Nos referimos a hechos como que las importaciones superaban a las exportaciones, al incremento del endeudamiento externo; al deterioro de pequeñas y medianas empresas, golpeadas por las importaciones, la falta de protección estatal y los fuertes controles impositivos; al crecimiento de la

desindustrialización, al aumento de la desocupación y la subocupación, resultado del cierre de industrias y de las políticas de reducción de personal de las privatizadas; al incremento de la precarización y la flexibilización laboral, a la caída de la participación de los asalariados en el P.B.I., y vinculado a esto último, a la importante transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los capitalistas. Tampoco lucían aún totalmente como fantasmas los pueblos que los cierres de ramales del ferrocarril privatizado transformarían en tales.

Modelo económico y régimen político

Estos eran sólo los primeros indicios de las brutales consecuencias que iba a producir sobre la sociedad y la economía argentina la profundización, bajo el menemismo, de las políticas iniciadas durante la última dictadura militar. Lo que terminó de concretarse durante los '90 y, desde 1995, con la aprobación electoral de una parte importante de la sociedad, es la quiebra el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, vigente en la Argentina desde los años '30 y profundizado durante el primer peronismo. En su reemplazo, se consolidó un modelo económico que ya no se asentaba en la agroexportación, como ocurrió en el período 1880-1930, ni en la industria de la etapa 1930-1976: el nuevo modelo estaba basado en la valorización financiera. Y cuando hablamos de ella, no aludimos únicamente a la enorme rentabilidad que obtenían los bancos o el sistema financiero en general, sino también a la renta financiera que embolsaban los capitales oligopólicos, líderes en las restantes actividades económicas, como la producción industrial, agropecuaria y los servicios privatizados.

Esto era posible porque las tasas de interés eran las que brindaban mayor rentabilidad dentro del sistema económico, y por el rol que jugaron la deuda externa, así como el plan de convertibilidad y otras reformas estructurales, impulsadas por el ministro Cavallo desde 1991.

El Plan de Convertibilidad establecía una paridad cambiaria fija: un dólar equivalía a un peso. Por el mismo, el Poder Ejecutivo Nacional se comprometía no sólo a no

modificarla, sino también, para garantizar la paridad, a no emitir moneda por encima de las reservas. El Estado argentino renunciaba así a la soberanía monetaria y se enajenaba la principal herramienta de intervención en la economía. Pero, en contrapartida, el plan resultó exitoso en materia de descenso de la inflación durante los primeros años de la década del 90, constituyéndose en uno de los aspectos legitimadores más importantes del gobierno de Menem, durante sus dos mandatos. Los primeros años de la Convertibilidad fueron, como ya lo señaláramos, tiempos de crecimiento del P.B.I., del aumento del consumo y de un ingreso de capitales que permitió la expansión de la oferta monetaria, así como la reaparición del crédito.

Pero, para sostener la paridad cambiaria y para que el plan fuera exitoso a largo plazo, era necesario que se inyectara regularmente una determinada cantidad de dólares al circuito económico local. Era preciso, por lo tanto, contar con altos niveles de exportación o en su defecto con una entrada regular de capitales. La entrada de dólares a la Argentina se resolvió de la peor manera para los intereses de su sociedad: comenzó con las privatizaciones (aproximadamente 20 a 25.000 millones de dólares) y continuó con endeudamiento externo.

El recurso de obtener dólares en el exterior para sostener el *uno a uno* se utilizó cada vez más desde 1994/1995 hasta fines de 2001. La toma de deuda se dio no sólo a través de bancos comerciales y organismos internacionales de crédito, sino sobre todo mediante la emisión de bonos de deuda pública.

En consecuencia, la deuda fue creciendo de manera espectacular. Si al fin de la dictadura alcanzaba los 45 mil millones de dólares, se calcula que, en 1991, ya había alcanzado una cifra aproximada a los 61 mil millones, para llegar al fin de la década a cerca de 140 mil millones de dólares.

Resulta llamativo observar la evolución que, simultáneamente, siguió la deuda privada: pasó de aproximadamente 3.500 millones de dólares en 1991 a casi 35.000 millones al finalizar la década. Eduardo Basualdo (2001) sostuvo que la contracara de este endeudamiento del sector privado fue la fuga de capitales al exterior, replicándose así el proceso de valorización financiera que tuvo lugar durante la última dictadura. Como en los tiempos de Martínez de Hoz, el capital

privado tomaba deudas en el exterior, las transformaba en pesos que colocaba en el sistema financiero local a tasas de interés superiores a las vigentes en el mercado internacional, para luego, con los pesos resultantes, comprar dólares (dólares que, en virtud del anclaje del *uno a uno*, se habían ido subvaluando) y fugarlos. Excelente negocio, sobre todo porque las pesadas consecuencias del peso de la deuda y de la fuga de capitales recaerían luego sobre el Estado y, a través del mismo, vía impuestos y ajustes, sobre las mayorías populares, que de este modo financiarían una vez más el círculo vicioso de la valorización financiera. La deuda externa se fue transformando en una bola de nieve que, en la medida que crecía, arrastraba a una mayor dependencia a los gobiernos argentinos respecto del extranjero. La defensa de este último estaba a cargo del F.M.I., el que, a medida que aumentaban los compromisos financieros de la Argentina, incrementaba sus presiones para continuar con las reformas estructurales que permitieran atender el pago de los intereses de la deuda.

Todas las decisiones de política económica quedaron atadas al eje directriz de la Convertibilidad. Cuando se acabaron los dólares de las privatizaciones, se apeló al endeudamiento externo. Pero, desde mediados de la década, comenzaron a manifestarse los primeros signos de insustentabilidad del modelo convertible ante problemas del capitalismo global, que se exteriorizaron en la crisis financiera de México (1994), la del sudeste asiático (1997) y la del Brasil (1999). Ante las dificultades consecuentes para atraer capitales, comenzaron los procesos de ajuste, es decir de achicamiento de gastos del Estado, de disminución de los salarios de estatales y jubilados, de deterioro creciente de los servicios de salud y de educación públicos, para citar algunas de sus consecuencias.

El flujo de capitales externos representaba la condición de existencia del régimen monetario. Por lo tanto, la idea de *seducir a los mercados* resultaba cada vez más imprescindible, a la vez que una opción terrible para la sociedad argentina ya que *seducir* significaba resignar cada vez mayores cuotas de soberanía y derechos de los trabajadores y de los ciudadanos, considerados hasta no hacía mucho tiempo inalienables.

Y volvemos a una pregunta ya formulada ¿Cómo fue posible llegar a este punto con la aquiescencia de buena parte de la ciudadanía, manifestada en el apoyo mayoritario a Menem en 1995?

Por un lado, ya señalamos el brutal poder disciplinador que ejercieron las hiperinflaciones. También "el veranito" de 1992-1994, así como la influencia del poder mediático machacando constantemente sobre las virtudes del neoliberalismo y del más extremo individualismo. Pero, hace falta introducir otro elemento, muy relacionado con las modificaciones que, paralelamente al achicamiento del Estado, la privatización de las empresas públicas, la concentración de la riqueza en pocas manos y la desocupación creciente: nos referimos a las modificaciones que se operaron en el ámbito político.

Podríamos preguntarnos cuál fue el tipo de democracia que rigió en la Argentina desde 1983 y, sobre todo, durante los años '90.

La democracia aparecía a fines de la década como un mero procedimiento reducido a la posibilidad de votar. En términos de José Nun (2000), no se trataba del *gobierno del pueblo* sino de un *gobierno de los políticos* en el que al pueblo sólo le toca legitimar a los gobiernos. Y siguiendo a Alfredo Pucciarelli (2011) podríamos hablar de una forma de democracia expropiatoria. El término designa el despojo, es decir la exacción de bienes ya obtenidos y la eliminación de conquistas sociales ya consagradas, consideradas como una parte del sistema de pertenencias de los despojados.

Para que tal expropiación sucediera, se operó una concentración inusual de poder en el Ejecutivo (llamativo aún en un régimen históricamente hiperpresidencialista como el argentino); el Congreso se transformó en un organismo viciado por la corrupción y el sistema judicial y, sobre todo su Tribunal Superior, la Suprema Corte de Justicia, perdió todo tipo de autonomía respecto del Poder Ejecutivo.

Si analizamos a los dos partidos políticos que a lo largo del siglo XX lograron captar el apoyo mayoritario de los sectores medios y populares, observamos que las modalidades discursivas y las prácticas políticas del P.J. y la U.C.R. cambiaron en relación a lo que era ya una tradición en cada uno de ellos, para asumir en ambos características comunes.

El peronismo levantó históricamente la defensa de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política; el radicalismo se erigió en el paradigma de la defensa de los derechos cívicos y de la ciudadanía política. Pero, bajo las dos presidencias de Menem, ambos partidos rompieron con este tipo de discursividad y convocatoria, acercándose o abrazando lisa y llanamente la ideología neoliberal, así como un pragmatismo despolitizante.

El elenco político conforma, efectivamente, un lenguaje muy pragmático, donde la política se reduce al arte de lo posible y el adversario se construye en el pasado, es decir en los errores que, según este grupo, llevaron a la hiperinflación.

La política, como apuntara Natalio Botana, se fue constituyendo crecientemente en una gestión mediática, abandonando la movilización y reduciendo sus propios márgenes de maniobra. Lo que se produce es una reorganización audiovisual de la esfera política, acompañada por el vaciamiento del discurso político.

Hasta el FREPASO, que apareció en el universo político como una fuerza cuestionadora y que capturó las expectativas y esperanzas de millones de argentinos desesperados ante las transformaciones operadas por el menemismo, descreía de organizar a sus bases, de formar políticamente y asentarse en una fuerte y extendida militancia, para privilegiar un partido de notables y a la instancia mediática como modo de relación con la sociedad.

En este contexto de una política limitada al pragmatismo o a la denuncia de los hechos de corrupción, las medidas tomadas desde 1989 y durante los '90 muestran que la autonomía de la clase política aparece fuertemente restringida, condicionada y subordinada al poder económico.

Este tipo de relación entre el poder económico y el sistema político ha sido caracterizada por Eduardo Basualdo (2001), como una forma de transformismo que él denomina *el transformismo argentino*.

Para Basualdo, basándose en Antonio Gramsci, la continuidad de la valorización financiera que se inició bajo la última dictadura requería diseñar una estrategia particular por parte de los grupos que habían emergido de ella como dominantes.

La dictadura había brindado a estos grupos un aporte fundamental: el aniquilamiento de buena parte de los cuadros políticos que hacían posible la

organización y movilización de los sectores populares, abortando la lucha social por medio del asesinato y el terror.

Pero, la finalización de la dictadura militar planteó a los grupos dominantes un desafío: ¿cómo asegurar bajo una democracia el control político que posibilite el desarrollo del nuevo patrón de acumulación, basado en la valorización financiera? Todo parece indicar que la opción de los sectores dominantes fue avanzar en la redefinición del sistema político y de la sociedad civil mediante una estrategia negativa que continuara la tarea dictatorial, pero a través de otros medios.

Cabe aclarar que se habla de una estrategia negativa, porque a través de la misma no se pretende construir consenso sino impedir la organización de los grupos subalternos, inhibiendo su capacidad de cuestionamiento. Ya no se tratará de hacerlo mediante la represión y el aniquilamiento, sino mediante procesos de integración de las conducciones políticas y sociales de los sectores populares. De este modo, inmovilizándolos, no habría posibilidad de generar alternativas al proyecto de los grupos dominantes.

La tarea central de los cuadros políticos y dirigentes sindicales de los sectores populares consistiría en la desestructuración y desmovilización de sus representados y en la perpetuación de la dominación, impidiendo sistemáticamente la formación de una clase dirigente por parte de los grupos subalternos.

Es interesante indagar qué especificidades adquirió el proceso en Argentina, es decir, la manera en que los grupos dominantes asimilaron en la Argentina a los dirigentes de los sectores subalternos, en general, y de la clase trabajadora en particular.

En nuestro país, según Basualdo, los sujetos que generan la ideología que hace posible la dominación no son los dirigentes de un partido de la derecha local, sino que la ideología proviene fundamentalmente de los países centrales. Por otra parte, los sujetos sociales que ponen en marcha y dan forma al transformismo son los mismos sectores o grupos dominantes. Al carecer de un partido orgánico, son ellos mismos, más específicamente la fracción del capital concentrado interno, los que -una vez agotada la dictadura militar- asumen la tarea de cooptar al partido

político que asume el gobierno, a distintos integrantes del partido opositor y a diversas conducciones de organizaciones que contienen a la sociedad civil.

¿Cuáles son las herramientas o instrumentos que utilizan para descabezar a los sectores populares de sus líderes y/o representantes? Si bien no hay que dejar de lado el rol que pudo haber jugado la herramienta ideológica, la principal vía de cooptación son factores de índole material: es decir, en Argentina, cobra importancia decisiva la corrupción y los altos ingresos relativos que perciben los integrantes del sistema político.

El proceso comenzó en los últimos años del gobierno alfonsinista. Fue la época en que, en el sistema político, empezó a crecer la importancia de los "operadores políticos", que al ser depositarios de los negocios políticos y económicos, se ubicaban en posiciones claves de la vida partidaria.

Las modificaciones si bien incipientes, constituyeron el comienzo del transformismo argentino. El proceso llegó a su cenit con el plan Brady y las privatizaciones. En ese momento, se operó la incorporación del sistema bipartidista en su conjunto a la órbita de los sectores dominantes, descabezando, de esta manera, al resto de los sectores sociales, inhibiendo su reacción sin concesión alguna.

Al calor de este proceso, los partidos políticos populares se transformaron en estructuras verticalizadas, manejadas por los operadores políticos, sin militancia, sin proyecto social y económico alternativo, sin discusión político-ideológica. Son partidos regidos por relaciones contractuales, nueva amalgama que reemplaza a los lazos ideológicos y políticos que congregaba anteriormente a los militantes.

Las relaciones contractuales son múltiples y no necesariamente excluyentes entre sí. Los salarios vinculados al empleo estatal constituían un primer nivel sobre el cual se estructuraba la verticalidad partidaria (salarios vinculados a todas las áreas estatales: municipales, provinciales y nacionales). Por otra parte, la reestructuración del Estado implicaba una modificación en la estructura ocupacional estatal. Durante los noventa, creció enormemente el número de contratados, cuyo financiamiento se vinculaba a programas con organismos internacionales de crédito. Los contratados recibían los salarios más elevados de

la administración pública, y a través de este mecanismo, el sistema político pudo financiar a sus cuadros, lograr nuevas adhesiones y, sobre todo, acallar a los críticos reales o potenciales a la gestión gubernamental.

Finalmente, pero no menos relevante, hay una tercera forma de ingresos percibido por el sistema político. Se trata de lo que se denominó *retornos, peajes y comisiones*, eufemismos que aludían concretamente a los sobornos que, principalmente, pagaban los integrantes de los sectores dominantes al sistema político, para lograr determinadas prebendas.

Entretanto, la corrupción se transformaba en un fenómeno generalizado que se verificaba –con diferentes modalidades- en distintas instituciones. A diferencia de lo que tradicionalmente se afirma, Basualdo considera que la corrupción no era un fenómeno transitorio vinculado a la perversidad de un determinado partido político o conjunto de dirigentes, sino de una característica estructural y permanente de este sistema de dominación. (Ver Anexo)

De este modo, el transformismo argentino, como lo designa Basualdo, obró en el sentido de aumentar la capacidad del poder económico para disciplinar al conjunto de la sociedad argentina detrás de sus proyectos e intereses, sin necesidad de utilizar la represión física como en la última dictadura.

A modo de cierre: sobre responsabilidades y resistencias

Luego del extenso recorrido compartido, parece no resultar tan paradójico el resultado de las elecciones de 1995, ni que la sociedad defendiera tenazmente en esa fecha y hasta el estallido de 2001 una convertibilidad que, inadvertidamente, la llevaba al abismo. El miedo a la hiperinflación, nueva forma de terror instalada, el fresco recuerdo del pánico y la desesperación condujo a la aceptación social de la receta neoliberal; receta que la historia se esfuerza una y otra vez en demostrar no es la más apropiada para satisfacer las necesidades de las mayorías populares. También jugó sin duda en favor de la reelección ciertos signos de estabilización y de crecimiento de la economía que se dieron en el corto lapso transcurrido entre 1992 y 1994.

No hay que buscar, sin embargo, en la mayoría de la sociedad la responsabilidad por la debacle que se estaba preparando y que se mostró con plenitud hacia fines de la década de 1990. Entendemos que los importantes contingentes de población de clase media y popular que dieron en el '95 su voto a Menem, no sólo no fueron responsables sino que fueron víctimas de un poder económico —entramado con el poder mediático- que, como a casi todo el resto de la sociedad argentina, no sólo la golpeó con la hiperinflación, sino que la aterrorizó, la sometió, la excluyó, la desocupó, la endeudó y la empobreció cultural y materialmente.

Además el gran poder económico desarrolló estrategias para dejar a las mayorías acéfalas de representación política y sindical, instalando su lógica corrupta entre los representantes históricos de los sectores populares, desvalorizando a la democracia, asociando a toda actividad política a la corrupción e instalando una ilegitimidad del régimen político que aún perdura.

Poner el acento en las responsabilidades del poder económico, no significa quitar responsabilidades a Menem y todos los políticos, funcionarios y sindicalistas involucrados en actos de corrupción, mientras un grupo extendido de ciudadanos se empobrecía hasta límites inimaginables. La corrupción y el sometimiento no eran el único camino posible, como lo demuestra la experiencia de muchos otros hombres y mujeres que, desde muy pronto, advirtieron el desastre. Hombres y mujeres que se organizaron y lucharon contra el modelo económico y político de una década que, con gran tino, algunos comenzaron a designar como *la segunda década infame*, siendo la primera la de los años de 1930.

Nos referimos a la resistencia de los trabajadores del Estado que, abandonados por sus dirigentes, se opusieron a las privatizaciones. Al Grupo de los Ocho diputados justicialistas que, liderados por Germán Abdala y el *Chacho* Álvarez, se separaron del menemismo cuando éste traicionó en el '89-'90 sus propuestas electorales. Aludimos a la Central de Trabajadores Argentinos (C.T.A.), que comenzó a gestarse a fines de 1991. Entroncada con la tradición combativa y popular del sindicalismo argentino de la C.G.T. de los Argentinos, fue configurando un movimiento social donde convergieron no sólo los trabajadores con empleo sino también los desocupados, los jubilados y todos los excluidos por el modelo.

Como olvidar la lucha de los jubilados quienes, solitariamente, se reunían todos los miércoles frente al Congreso para reclamar por la situación de desamparo que padecían. Imizcoy, Norma Plá, y junto a ellos, en otra batalla convergente, las Madres de Plaza de Mayo y los organismos de Derechos Humanos, reclamando en forma incansable e indeclinable que no se olvidara ni se perdonara a los responsables del genocidio.

Y mientras Menem era reelecto, un nuevo movimiento estaba en germen. Un movimiento destinado a conmover a la sociedad y la política argentina en los años subsiguientes. Hablamos de las organizaciones que se fueron dando los desocupados, más conocidas como movimiento piquetero. Nacido en localidades del interior, a partir de la masa de desocupados que sembraba el proceso de privatización de Y.P.F., el movimiento se extendería por el Gran Buenos Aires y otros lugares de la república, a medida que los índices de desempleo crecían y centenares de miles de conciudadanos eran expulsados de la sociedad salarial, dejando a muchos de ellos desprovistos de medios de subsistencia elementales. Podríamos citar a muchísimas personas más, así como a los millones de ciudadanos y ciudadanas anónimos que no convalidaron en 1995 la continuidad del menemismo. La historia puede avudar a comprender el pasado y con sus

ciudadanos y ciudadanas anónimos que no convalidaron en 1995 la continuidad del menemismo. La historia puede ayudar a comprender el pasado y con sus lecciones colaborar en que, al menos, no volvamos a transitar por los caminos que nos llevaron al abismo. Deseamos que este trabajo sea una contribución para entender estos años, despertar interrogantes y fértiles discusiones, y sobre todo para comprometerse con un *Nunca más* a fórmulas socio-económicas que demostraron ser muy destructivas para la vida y los sueños de las mayorías populares.

Bibliografía

- Basualdo, Eduardo. Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes-Flacso-IDEP, 2001.
- ➤ De Riz, Liliana. "Las elecciones en Argentina de 1991 a 1995", en Rial, Juan y Zovatto, Daniel (comps.), Elecciones y democracia en América Latina (1992-1996): urnas y desencanto político. San José de Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos/CAPEL, 1998.
- Filadoro, Ariel, Giuliani, Alejandra y Mazzeo, Miguel. El retorno a la democracia: la herencia de la dictadura y las ilusiones frustradas. 1983-1989, en AA.VV., Historia Argentina Contemporánea. Bs.As., Dialektik, 2008.
- Filadoro, Ariel. Los noventa: del éxito al fracaso...¿de quién?, en AA.VV., Historia Argentina Contemporánea. Bs. As., Dialektik, 2008.
- Mazzeo, Miguel. La globalización neoliberal. Algunas definiciones generales, en AA.VV., Historia Argentina Contemporánea. Bs.As., Dialektik, 2008.
- Minujin, Alberto y Kessler, Gabriel. La nueva pobreza en Argentina, Buenos Aires, Editorial Planeta, 1995.
- Nun, José, Democracia. ¿Gobierno del pueblo o gobierno de los políticos? Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2000.
- Pucciarelli, Alfredo y Strauss, Luciana. El sinuoso camino del fin: La democracia corporativa en jaque, en la revista de Ciencias Sociales (UBA). diciembre de 2011.
- > Torrado, Susana. El costo social del ajuste, Bs.As., Edhasa, 2010.

Otras fuentes

- La Nación, Clarín, Página 12 y otros diarios de tirada nacional publicados durante abril y mayo de 1995.
- Solanas, Fernando *Pino*, Memoria del saqueo, (película documental),
 Buenos Aires, 2004

ANEXO

I) Las privatizaciones

El menemismo puso en marcha la venta de todas las empresas de bienes y servicios que se encontraban en manos del Estado. Sus impulsores más entusiastas fueron el ministro de Obras y Servicios Públicos Roberto José Dromi y la líder ucedeísta María Julia Alsogaray. Sin embargo, es justo advertir que dichas privatizaciones difícilmente hubieran podido llevarse a cabo sin la aceptación del radicalismo y la complicidad de muchos sindicalistas. Uno de los líderes de la Central de Trabajadores Argentinos, Víctor De Gennaro, muy crítico de la dirección cegetista, denunciaba por entonces que los líderes de la C.G.T. se habían convertido en representantes del gobierno, abandonando a sus representados naturales, los trabajadores. Este cambio –agregaba De Gennarose acompañaba de otra curiosa mutación. Refiriéndose a los mentados sindicalistas, decía: Visten, piensan y viven como empresarios, manejando incluso acciones de las empresas privatizadas.

Las privatizaciones se realizaron de manera rápida, en menos de un año. Hacia octubre de 1990 casi todas las empresas públicas seleccionadas habían sido transferidas al sector privado. Su instrumentación se llevó a cabo mediante un llamado a licitación y venta de acciones, que la sanción de la ley y los respectivos decretos presidenciales posibilitaron. Señala Ariel Filadoro (2008) que la venta de las empresas públicas constituía una exigencia de los acreedores externos. Éstos esperaban cobrar sus acreencias con el Estado mediante el dinero que se obtuviera en el proceso privatizador.

En sintonía con tales expectativas, el Estado argentino aceptó bonos o títulos de la deuda como medio de pago de las empresas públicas que traspasó al sector privado. El Estado obtuvo alrededor de 20.000 millones de dólares en títulos y efectivo por las empresas privatizadas. Los valores de venta, en términos

generales, se encontraron muy por debajo del valor al que estas empresas cotizaban internacionalmente.

Es importante subrayar que los títulos de deuda tenían muy poco valor real. Para ejemplificar: en el caso de la privatización de la empresa de telefonía ENTel, los consorcios ganadores ofrecieron títulos por 5.000 millones de dólares a valor nominal, cuando en ese momento cotizaban a sólo el 15% de ese valor en el mercado internacional. Operaciones como la descripta permitieron que los acreedores cambiaran títulos de deuda de cobro dudoso (como sugería su reducida cotización internacional), por acciones de empresas monopólicas cuyos beneficios eran seguros.

¿Cuáles fueron las empresas vendidas y cuáles las consecuencias de su traspaso a manos privadas?

La primera que "salió a remate", en noviembre de 1990, fue precisamente la citada Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel). Se decidió dividir a la compañía en dos. Cada una de ellas prestaría servicios en una determinada zona geográfica. La parte norte quedó para Telecom, una empresa italo-francesa, mientras que el sector sur le fue asignado a Telefónica, una empresa española que se encontraba en sociedad con el Citibank. Por ella, los compradores desembolsaron simplemente 220 millones de dólares (más títulos de deuda absolutamente depreciados) que era la suma que ENTel recaudaba en una facturación bimestral. Además, como las empresas compradoras reclamaban garantizar cierto nivel de beneficios, el Estado les aseguró por contrato una rentabilidad anual mínima del 16 %, al tiempo que el valor del pulse aumentó 5 veces.

Otras empresas que fueron cayendo bajo los embates de esta ola privatizadora fueron las de transporte: la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas, comprada por Iberia; y también los trenes, sector en el que las empresas privadas cerraron los ramales considerados menos redituables, conservando los servicios de carga y muy pocos servicios de transporte de pasajeros. El criterio de permanencia o cierre no se basó en la planificación de la infraestructura pública,

sino en la rentabilidad empresaria. Las empresas concesionarias declararon que no les interesaba seguir operando ciertos ramales y el gobierno, al avalar dicha decisión, dejó aisladas a importantes regiones del país. Seis provincias quedaron así sin ferrocarriles.

Además, se concesionaron rutas nacionales: alrededor de 10.000 kilómetros construidos con presupuestos públicos, fueron otorgados a los privados para su explotación con el sistema de peajes. Otros recursos que cayeron en la esfera privada fueron los yacimientos petrolíferos (Y.P.F.), y Gas del Estado, subdividido en ocho zonas para su distribución. Una de las privatizaciones más escandalosas fue la de Obras Sanitarias de la Nación (O.S.N.), que le fue entregada por 20 años a la Lyonnaise des Eaux y Sociedad Comercial del Plata, sin pago alguno, solamente con el compromiso de una cierta cantidad de inversiones que, valga agregar, no se cumplieron. Además fueron privatizadas las centrales eléctricas y sus distribuidoras, que se convirtieron en Edenor, de capitales franceses, y Edesur, de capitales chilenos y norteamericanos. Estos últimos también se apropiaron de grandes obras hidroeléctricas, como El Chocón y Piedra del Águila, localizadas en la Patagonia argentina. En cuanto al sistema financiero, se privatizaron una decena de bancos provinciales y, en 1994, el sistema de jubilaciones y previsión social pasó a manos de unas veinticuatro Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (A.F.J.P.) privadas. De los 11 puntos del salario que el trabajador aportaba para su jubilación, las A.F.J.P. les capitalizaban sólo 7,5, quedándose con el 3,5 restante para gastos de seguro y administración. En 1994, esas comisiones ascendieron a una suma aproximada a los 3.100 millones de pesos-dólar.

Si bien entre 1990 y 1994 se llevaron a cabo la mayor parte de las privatizaciones, dicho proceso se extendió hasta 1998 e incluyó el Mercado de Hacienda de Liniers, la empresa de Correos, así como los principales medios de comunicación -canales de T.V. y radios- bastiones fundamentales desde donde, con comprensible fervor, se había denunciado la ineficacia estatal.

Los resultados del proceso desestatalizante fueron paradójicos, pues aumentó todo aquello que las privatizaciones prometían disminuir. Si su objetivo era la

reducción de la deuda, los 20.000 millones de dólares recibidos no sirvieron para ese fin pues, como sostenía el fiscal de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas, éste era el único país del mundo en donde, a pesar de haberlo vendido todo, la deuda externa se cuadruplicó. Por otro lado, las empresas estatales fueron presentadas como ineficientes y deficitarias y como nidos infectos de corrupción. Sin embargo, al privatizarlas, las pérdidas fueron asumidas por el Estado mientras que las ganancias quedaron para los privados; la corrupción se multiplicó, en parte como producto mismo de dichas ventas. Por otro lado, se había sostenido que, al privatizarlas, se desregularían los mercados y, con la consiguiente competencia, las empresas se verían obligadas a adquirir mayor eficiencia, así como a abaratar las tarifas de sus servicios. Sin embargo, en la práctica, se produjo la conformación de un virtual monopolio en su área de acción y los usuarios quedaron en calidad de rehenes, dando vía libre para que fueran aplicadas altísimas tarifas por servicios que siguieron sin estar a la altura de su costo.

También se sostuvo que el dinero de las compras se utilizaría para aumentar el presupuesto educativo y la situación de los jubilados, cosa que no ocurrió. Por último, se sostenía que las privatizadas atraerían inversiones extranjeras, crearían empleos y mejoramientos salariales entre sus trabajadores y empleados, hecho que tampoco sucedió, pues sólo aumentó el desempleo, alcanzando cifras exorbitantes, mientras el trabajo se precarizaba.

II) Sobre la corrupción: "cleptocracia" o condición estructural de un modelo

La década menemista estuvo surcada por centenares de denuncias de negociados y escándalos. La falta de controles y la sensación de impunidad animaron a diversos funcionarios a hacer negocios a costa del Estado, amparados en un sistema judicial que miraba para otro lado.

Entre la innumerable cantidad de casos de corrupción que emergieron en la década, podemos mencionar los siguientes: el de los frigoríficos Swift, empresa que denunció haber recibido un pedido de coimas por parte del gobierno para

acelerar los trámites de liberación de impuestos de maquinarias para su planta de Rosario. Al mes siguiente, el periodista Horacio Verbitsky, hizo pública la denuncia del caso, que le costó el cargo al asesor presidencial Emir Yoma, así como a Antonio Erman González, Ministro de Economía.

En 1991, salió a la luz lo que se conoció como el *Yomagate*, donde se denunciaba el ingreso de fuertes sumas de dinero, provenientes del narcotráfico norteamericano, para ser blanqueadas en el país mediante diversas operaciones financieras. En dicha oportunidad, se involucraba a la cuñada del presidente, por entonces secretaria de audiencias presidenciales, Amira Yoma

Otro de los casos que involucró directamente al presidente y a varios de sus ministros fue la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, países que por entonces enfrentaban conflictos bélicos, con la ex Yugoslavia y con Perú, respectivamente. Por dicha causa, numerosos testigos murieron en extraños accidentes y una explosión, aparentemente intencional para borrar pistas del contrabando, destruyó la fábrica militar de Río Tercero, acabando con media ciudad y provocando varios muertos.

A dichos casos le siguieron otros, como la participación de numerosas empresas en sobornos durante la privatización de Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), en la que quedó implicada la funcionaria María Julia Alsogaray, así como los sobornos realizados por la empresa norteamericana IBM a funcionarios del Banco Nación, para que les fuera otorgada la concesión de informatizar 525 sucursales de dicho banco.

Se podrían agregar una cantidad innumerable de casos que por cuestiones de espacio no abordaremos. Cabe mencionar, sin embargo, los negocios otorgados a las empresas privatizadas, la venta de leche adulterada al Estado y un largo etcétera.

Tal resultó ser la impunidad, que los mismos funcionarios reivindicaban dichos actos. Basta pensar en Alberto Kohan (Secretario General de la Presidencia) diciendo: - *No importa de donde vengan los capitales, lo importante es que vengan*; o la célebre frase de José Luis Manzano (Ministro del Interior durante la primera presidencia de Menem): - *Yo robo para la corona*; las palabras de Raúl

Granillo Ocampo (Secretario Legal y Técnico), cuando en 1990, sostenía que: - A la gente no le preocupa la corrupción. Lo que pasa es que el tema ganó la calle. O las declaraciones del líder sindical Luis Barrionuevo quien sostenía que en este país nadie se hizo rico trabajando, mientras que cuando se le preguntaba cómo podría mejorar la Argentina, respondía: - Tenemos que dejar de robar por dos años.

Lejos habían quedado ciertas definiciones del discurso de asunción de Menem declarando *a la corrupción, delito de traición a la patria*. Años más tarde, al referirse a su mandato, sostenía que - *En mi país nunca hubo corrupción gubernamental*. Si acaso algunos funcionarios fueron corruptos, pero eso puede suceder en cualquier parte.

Pero acaso, ¿el problema que afectó a la Argentina y a otros países de América Latina durante esos años es un problema de cleptocracia? Consideramos que no y acordamos con James Petras, cuando sostiene que la corrupción política es el principal vehículo de la movilidad social en la era de la monopolización imperial del mercado. No se trata simplemente de una transgresión de la moral por parte de individuos imperfectos, sino de una condición estructural endémica del modelo neoliberal.

Según Horacio Verbistky, la corrupción tan acentuada durante el gobierno menemista fue el precio que se pagó para que la dirigencia justicialista abandonara sus convicciones, la defensa del patrimonio nacional y de los intereses populares que habían sido hasta ese momento su razón de ser. No tiene sentido interpretarlo de otra manera. No es una impureza de un modelo económico que se puede suprimir y conservar el modelo, sino que más bien resulta una condición necesaria, es parte indisoluble del modelo.